

PROCESO: EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA
DEMANDANTE: COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE CARTAGO (COOMOCART)
DEMANDADO: LA EQUIDAD SEGUROS O.C.- LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
RADICADO: 66001-40-03-008-2022-0759-00

SENTENCIA No. 159
JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL



PEREIRA RISARALDA
DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO

De proferir la decisión de fondo de única instancia en este asunto ejecutivo se ocupa el despacho, una vez escuchados los alegatos de conclusión y habiendo el despacho signado en forma oral el sentido del fallo en los términos del art. 374 del C. G. P.
Escuchados los alegatos de las partes, procede el despacho a proferir la decisión de mérito que en derecho corresponda dentro de este asunto.

ANTECEDENTES

La Sociedad COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE CARTAGO (COOMOCART) promovió demanda Ejecutiva de Mínima Cuantía en contra de LA EQUIDAD SEGUROS O.C. (LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES Y LA EQUIDAD, por su presunto incumplimiento respecto al título ejecutivo denominado "Respuesta Solicitud de devolución de aportes, por el valor de \$19.096.127".

ACTUACIÓN PROCESAL

La demanda fue admitida por auto proferido el 16 de septiembre de 2022 y se le imprimió el respectivo trámite legal del proceso Ejecutivo, se dispuso la notificación del mandamiento de pago a la demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 2213 de 2022, haciendo las advertencias de ley.

Posteriormente, notificada la parte ejecutada, dentro del término presentó recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago, alegando:

- Inexistencia obligación insoluta en favor de la entidad demandante, comoquiera que existe una cartera pendiente de pago por parte de la ejecutante en favor de las aseguradoras, que supera el valor pretendido y sobre la cual operó la compensación •
- Inexistencia de título ejecutivo que reúna los requisitos formales para librar mandamiento ejecutivo de pago en contra de las compañías aseguradoras
- Sobre la inexistencia de una obligación exigible a las demandadas
- El presunto derecho que aduce tener el extremo actor debe resolverse a través del proceso verbal declarativo, en tanto la vía ejecutiva es improcedente para tal fin.

Mediante auto de fecha 17 de agosto de 2023, NO se repuso la providencia atacada y se advirtió a la parte demandada sobre el término de que disponía para pagar y/o excepcionar.

Dentro de dicho término, el mandatario judicial de la demandada allegó escrito de contestación, proponiendo excepciones:

- ***Inexistencia obligación insoluta en favor de la entidad demandante, comoquiera que existe una cartera pendiente de pago por parte de la ejecutante en favor de las aseguradoras, que supera el valor pretendido y sobre la cual operó la compensación.***
- ***En este caso operó la compensación y, consecuentemente, se extinguieron las obligaciones***

Agotada esta etapa procesal, se corrió traslado de las excepciones a la parte demandante. Posteriormente, se fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 392 del Código General del Proceso, el día 22 de abril de 2024, en la que se recibió el interrogatorio de las partes, se fijó el litigio, se decretó oficiosamente el testimonio del señor Oscar Mejía Arcila, y se solicitó allegar copia de las pólizas AA017821 y AA017820, así mismo, se dispuso fijar nuevamente fecha para llevar a cabo la recepción del testimonio aludido, alegaciones.

CONSIDERACIONES

Los presupuestos de competencia, capacidad de las partes para comparecer al proceso y demanda en forma se encuentran reunidos y no existe vicio que pueda invalidar lo actuado por no existir causal generadora de nulidad.

El despacho es competente para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la parte demandante; la demanda no adolece de ningún vicio formal y los presupuestos procesales se encuentran debidamente reunidos. Así mismo se tiene que el suscrito no ha perdido competencia para emitir el fallo respectivo.

Ahora, descendiendo al caso concreto y verificando el interés jurídico que ubica a los extremos litigiosos en sus posiciones respectivas dentro de la relación jurídica sustancial que aquí se ventila, se advierte que la legitimación en la causa por activa identifica al demandante como la persona en la cual se radica el derecho que reclama, que en su calidad de tenedor legítimo del título ejecutivo.

De igual manera, La legitimación en la causa por pasiva identifica al demandado, o sea a la persona frente a la cual se exige una obligación correlativa, en este caso LA EQUIDAD SEGUROS O.C. (LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES y LA EQUIDAD quien debe cancelar las sumas que se pretenden en caso de prosperar las pretensiones del actor.

Expuesto lo precedente, tenemos en el particular que la legitimación en la causa como presupuesto de mérito para fallar, está presente en los dos extremos de esta acción; de manera que, ante las excepciones propuestas, procede el suscrito a decidir bajo el análisis probatorio que a continuación sigue.

Examinado el título ejecutivo aducido a la presente ejecución, esto es, respuesta solicitud de devolución de aportes, por el valor de \$19.096.127 (pdf 4 pag 12-13), se tiene que del mismo se desprende la existencia de una obligación clara, expresa y exigible al tenor del artículo 422 del Código General del Proceso, y retrotrayéndonos al momento de librar el mandamiento de pago fue ese documento al que el despacho le otorgó el mérito suficiente para edificar la orden compulsiva de pago.

Del análisis del título presentado, se desprende que, el mismo fue objeto del ataque de rigor en sede de reposición contra el mandamiento de pago, situación que se resolvió oportunamente por el estrado mediante proveído del 17 de agosto de 2023 notificado en el estado virtual 134, sin recurso alguno por parte de la parte pasiva.

De suerte que venir a especular sobre la identidad y validez del título ejecutivo en la fase decisoria del juicio resulta a todas luces improcedente, sobre todo cuando de sus requisitos formales se trata, en los términos del art. 430 inciso segundo del estatuto procesal civil.

Respecto del problema jurídico por resolver y al tenor de lo reseñado en la fijación del objeto del litigio se tiene que, corresponde a este funcionario determinar si la demandada LA EQUIDAD SEGUROS O.C. (LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES Y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA) se encuentra obligada a cumplir la obligación de dar y concretamente materializada ésta en pagar a la parte demandante los valores por los cuales se libró mandamiento ejecutivo de pago, o si por el contrario, operó para el caso de marras la figura de la compensación para efectos del extinguir la suma reclamada.

Ahora bien, en virtud de lo anterior ha de analizarse el escrito de contestación presentado por el apoderado judicial de la ejecutada LA EQUIDAD SEGUROS O.C. (LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES Y LA EQUIDAD).

Como primera medida, encuentra el despacho que en la contestación de la demanda, se omitió hacer pronunciamiento sobre cada uno de los hechos, tal como lo establece el artículo 97 del C.G.P:

"La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto".

De otro lado, se tiene que el mandatario judicial de la parte demandada, solo allegó escrito denominado EXCEPCIONES DE MÉRITO en el cual presenta excepciones de fondo denominadas **"1-Inexistencia obligación insoluta en favor de la entidad demandante, comoquiera que existe una cartera pendiente de pago por parte de la ejecutante en favor de las aseguradoras, que supera el valor pretendido y sobre la cual operó la compensación. 2- En este caso operó la compensación y, consecuentemente, se extinguieron las obligaciones."**

Acerca del título ejecutivo presentado al momento de implorar el mandamiento de pago, se tiene que el mismo emerge de la potestad unilateral de la entidad demandada de expedir certificación en la cual consta que en favor de la cooperativa demandante existe un rubro por concepto de los aportes que durante varios años ha depositado en calidad de asociada de la referida entidad solidaria dedicada al campo comercial de los seguros, en dicho documento reseñado como "Respuesta solicitud devolución de aportes" del 3 de enero de 2019 recibido por la demandante, se señala de manera expresa y sin ambages que la Equidad (entiéndase seguros generales o.c. y seguros de vida o.c.), se pronuncia sobre la desafiliación de la Cooperativa de motoristas de Cartago, es decir casi cuatro meses después de la renuncia (septiembre 24 de 2028) y deja en claro en el escrito dirigido al gerente de la cooperativa de motoristas que el total de aportes a devolver era de \$19.096.127.00, y discrimina de paso en forma precisa los diferentes conceptos de esa cifra; advierte los requisitos para el pago de dichas sumas; no sin antes reseñar la regulación estatutaria para efecto de la devolución de aportes (art. 30 del estatuto) y los plazo para dicho pago que no sería superior a los 6 meses; esa misiva la suscribe Javier Ramírez Garzón en su calidad de vicepresidente legal corporativo.

Fluye con meridiana claridad que allí la entidad ejecutada está aceptando la existencia de una obligación de dar, concretamente de pagar una suma de dinero a quien hoy funge como ejecutante, y quien para entonces ostentaba la calidad de asociado; allí no hubo

discusiones acerca de la existencia de la condición del reclamante y menos aún, que existían deudas por cruzar a cargo de la cooperativa de motoristas derivadas de pólizas por responsabilidad civil contractual o extra contractual como se adujo con posterioridad.

No puede a estas alturas de la tramitación procesal endilgársele al título la condición de ser complejo o compuesto como se planteó en la audiencia final, y que en ese orden de ideas debió el ejecutante edificar materialmente un componente documental para efectos de reclamar unos estipendios económicos que a su nombre obraban en el haber patrimonial de la entidad demandada y que había reconocido en su momento, y frente a lo cual solo debía atender la presentación de algunas exigencias formales para la devolución o pago que nunca aconteció.

El documento adosado con la demanda ejecutiva muestra a las claras que como consecuencia del vínculo que existía entre la Equidad y la Cooperativa asociada se emitió la manifestación precisa y clara de la existencia de unas sumas de dinero por concepto de aportes en favor del ente cooperativo, que desde el mes de septiembre de 2018 había decidido por escrito y ante el órgano competente presentar la renuncia o desvinculación definitiva por razones claramente esbozadas; de allí surge la obligación perentoria para la Equidad encaminada no solo a resolver el retiro, sino la devolución de los aportes; aquí emerge el interrogante, en virtud de la cual, aplicaba para la cooperativa la previsión del art. 11 de la resolución 200 de septiembre de 2011, según la cual la formalización del retiro estaba ligada a que se efectuaran los cruces y compensaciones correspondientes de las deudas de la cooperativa con el ente emisor al cual estaba asociada, veamos que reporta el dossier:

La prueba documental enseña que fue en escrito calendado el 8 de agosto de 2018 cuando el representante legal de la cooperativa decide renunciar basado en su disgusto por las condiciones ofrecidas para las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, calificando de desventajosa para la cooperativa dicha oferta comparada con las ofrecidas a otras empresas del gremio transportador; esa decisión unilateral y justificada de la cooperativa hacía referencia a las pólizas **AA017820 y AA017821** en las cuales fungía como tomadora la Cooperativa y que reportan como fecha de expedición el 2 de agosto de 2018; es decir llevaba 6 días calendario de vigencia cuando se decide renunciar unilateralmente al contrato de seguro; frente a ese acontecimiento unos días después, y por escrito, la Cooperativa decide pagar a prorrata el valor de 7 días del costo global de las pólizas \$8.772.703.00, reclamando de paso, que dichas pólizas fueran descargadas del RUNT ante la vigencia de otros contratos de idéntica naturaleza contratados con otro ente asegurador.

Es la misma normativa mercantil la que permite la revocación unilateral del contrato de seguro (art. 1071 C. Co.) cuando regula **"...por el asegurado, en cualquier momento, mediante aviso escrito al asegurador."**

Se decanta además, de las disposiciones del estatuto mercantil, que el plazo para el pago de la prima como obligación a cargo del tomador, será dentro del mes siguiente desde a fecha de entrega de la póliza, de suerte que, si la vigencia de esta data del 2 de agosto de 2018, se tendría en cuenta la fecha de entrega, que no se probó para proceder a hacer exigible el pago, incluso por vía ejecutiva como lo manda el art. 1053 del C. de Comercio.

Igualmente obran en autos evidencias puntuales que indican que Equidad Seguros una vez enterada de la cancelación de las pólizas se pronuncia el día 14 de agosto de 2018, y así respondió a la Cooperativa al correo de Coomocart acerca de las gestiones internas para la cancelación en comento; es decir la culminación del vínculo contractual dependía más de la aseguradora, y la intención indeclinable de la cooperativa del retiro se ratifica

cuando en el RUNT se insertó una nueva póliza que cubría los amparos requeridos, y no afectaba sus finanzas como lo planteo su representante legal.

La discutida compensación surge como consecuencia de la aplicación del precepto estatutario que así lo ordena, y fundado en que las pólizas que habían sido canceladas tuvieron vigencia, según se acreditó en autos, hasta el día 2 de agosto de 2019, a pesar del pedimento de su cancelación de un año atrás, reportando además el documento contentivo del pantallazo que dichos contratos aparecen cancelados según el siguiente vínculo

-póliza

soat-

<https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultavehiculo>

Cuando se emite contestación a la petición de devolución de aportes, la entidad demandada en fecha 8 de abril de 2022, es decir tres años y 8 meses después, indica que el retiro como asociada de Coomocart se remonta al mes de diciembre del año 2018, situación que resulta independiente de la vigencia de las pólizas que meses antes fueron canceladas por la Cooperativa; señalando además que para entonces la citada tenía obligaciones pendientes con la aseguradora; lo que a todas luces resulta contradictorio con el escrito anticipadamente remitido a la Coomocart y de fecha 3 de enero de 2019, en el cual se señala la existencia de aportes a su favor, y si en gracia de discusión aquellas pólizas aún estuvieran vigentes y no habían sido canceladas; por qué razón no se hizo exigible el pago; por qué se viene a plantear el desembolso con cruce de cuentas en abril del 2022; por qué las pólizas se mantuvieron insertas en la página del Runt como vigentes hasta el año 2019 (agosto); por qué la tardanza en resolver el retiro de la asociada (dic. 2018)?

Aquí se ventila un asunto entre entidades del sector cooperativo, donde debe primar con mayor contundencia el principio de solidaridad y ayuda mutua; y todo indica que en su lugar emerge un contexto de negligencia que raya con la mala fe de parte de la aseguradora, que dejó pasar el tiempo, no reclamó los pagos, y a pesar de haber aceptado la existencia de unas sumas de dinero en favor de la Cooperativa, solo vino a exponer el cruce de cuentas y la compensación, años después contrariando de paso el documento que hoy sustenta la pretensión ejecutiva.

Para que la compensación como medio de extinguir las obligaciones opere eficazmente, se requieren ciertos presupuestos de tipo legal, que no se compaginan con el ingrediente fáctico y probatorio obrante en autos; el análisis puntual y conjunto de las pruebas llevan a plantear esa consideración que desde el punto de vista legal consagra "una doble entrega de capitales, simplificando de este modo las relaciones del deudor y del acreedor, cada uno cobra con lo que se le debe."

El Código Civil preceptúa "Art. 1714.- Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse."

De otro lado la misma codificación, señala: "Art. 1715.- La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de los deudores: y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes: 1º Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad; 2º) Que ambas deudas sean líquidas; y 3º) Que ambas sean actualmente exigibles. Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor."

Igualmente señala el estatuto en mención: "Art. 1716.- Para que haya lugar a la

compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras...”

Así las cosas, se tiene que el legislador ha establecido el proceso ejecutivo como un mecanismo de coerción para hacer efectivo un derecho reconocido, o sea, aquellos que son ciertos e indiscutibles, pero para que este pueda adelantarse es necesario que exista un título ejecutivo en el cual conste una obligación, clara, expresa y actualmente exigible, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 422 del Código General del Proceso (norma aplicable al momento de incoar la demanda), o por lo menos la presunción de tales requisitos.

La ley exige que se satisfagan varios requisitos para que las obligaciones puedan ser susceptibles de ejecución. Entre ellos están los formales, relativos a que los documentos conformen una unidad jurídica, y que provengan del deudor; además están los requisitos sustanciales según los cuales es necesario que los documentos que conforman el título ejecutivo contengan obligaciones claras, expresas y exigibles.

Por lo anterior se vislumbra que nos encontramos frente obligación, clara, expresa y actualmente exigible, requisitos necesarios para que un cobro ejecutivo sea procedente, como bien lo establece el artículo 422 del C.G.P, norma rectora que tiene como fundamento los siguientes conceptos normativos:

Cuando no referimos a quede debe ser expresa debemos entender que la redacción del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación, esto haciendo relación directa con los títulos, podemos observar la existencia de una obligación de dar por valor de \$19.096.127.

Cuando nos referimos a que es clara obedece a que la referida obligación no da equívocos, en otras palabras, en la que se identifican el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan, así las cosas, queda claro el acreedor es la COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE CARTAGO (COOMOCART) y el deudor, LA EQUIDAD SEGUROS O.C. (LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES Y LA EQUIDAD. como se desprende del título en estudio, la naturaleza de la obligación consiste la devolución de aportes que solicita la parte ejecutante.

Finalmente, el concepto de exigible obedece al indicar que su cumplimiento este sujeto a plazos, o una condición, dicho de otro modo, una obligación clara y simple ya declarada, para el caso que nos ocupa, tenemos como fecha de vencimiento 11 de marzo de 2019 (pdf 4 pág. 13) plazo que se encontraba cumplido al momento de iniciar esta acción judicial.

Los anteriores presupuestos normativos, tienen su sustento en la Sentencia T 747-13, mediante la cual la Corte Constitucional indicó:

"Las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es clara la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada"

Se tiene entonces que el presente litigio reúne las exigencias del artículo 422 del Código General del Proceso y que se caracteriza por contener una obligación clara, expresa y exigible, por lo que se accedió a librar la orden de pago frente a esta, en la forma solicitada; contrario a la hipótesis de la colega de la parte pasiva, que argumenta la existencia de un menguado requisito en el título, por tratarse este de un documento compuesto o complejo, que debió ligarse en su estructuración a una serie de componentes materiales ausentes en autos.

Confrontados los argumentos expuestos por el mandatario judicial con las normas en comento, se advierte que, en el presente asunto, no le queda otro camino a este despacho, que declarar no probadas las excepciones planteadas, toda vez lo sustancial planteado en la escueta contestación de la demanda se encamina a determinar la existencia de la figura compensatoria como medio de extinguir la obligación que se tenía con Coomocart.

Todo lo anterior conforme al material probatorio allegado, sobre el cual deben basar sus consideraciones los administradores de justicia, bien, lo establece el artículo 164 del C.G.P

"Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho"

En este orden de ideas, resueltas desfavorablemente las excepciones, el despacho itera que se está en presencia de un título ejecutivo que conforme a la normatividad vigente goza de toda presunción legal, reúnen los requisitos del artículo del 422 del C.G.P., y que además contiene por si solo una obligación clara, expresa y exigible, que cumple con los requisitos de ley en la esfera sustancial.

ALEGACIONES:

Los atinados planteamientos jurídicos planteados por el distinguido colega de la parte actora son de pleno recibo por este ente judicial, al atinarse válidamente a la situación fáctica aquí ventilada; según la cual frente al retiro dela Cooperativa y cumplir fehacientemente con las exigencias para la devolución de aportes; la obligación emerge en cabeza de la Equidad Seguros; que si bien estaba facultada para el cruce de cuentas y compensar deudas; no se pudo obtener claridad por el manejo poco ortodoxo que la ejecutada dio al tema de la cancelación de las pólizas; habiendo previamente certificado la existencia de unas sumas de dinero en favor Coomocart, por concepto de aportes.

Las hipótesis de la fungibilidad en el punto concreto no opera para este operador judicial, en el entendido de que se trata de sumas dinero, cuantificadas objetivamente, así procedan unas por aportes, y otras por un supuesto crédito.

En el hipotético de la revocación o no renovación automática de las pólizas; se insiste en la potestad legal que se otorga al asegurado o tomador para declinar al seguro en cualquier momento con el formalismo escrito.

La versión jurídica de tratarse de un asunto de ejecución versus uno declarativo, llevo a esta agencia de la judiacturea desde un principio a inclinarse por el rito ejecutivo persuadido por la existencia de la plena prueba de la existencia del derecho que caracteriza esta clase de asuntos y materializado en un documento proveniente del deudor con las implicaciones sustanciales de una obligación con los ribetes dispuestos en la norma 422 del C.G.P.; es decir todo se limitaba a la exigibilidad de una obligación de dar y no una enteramente constitutiva de una derecho como se pregona en el otro extremo de la

litis.

En cuanto a las interesantes consideraciones jurídicas de la togada de la parte pasiva se tiene que el despacho en esta ocasión, y en el momento procesal correspondiente, fijó la posición en cuanto a los instrumentos procesales instituidos para atacar los requisitos del título ejecutivo una vez dispuesto el mandamiento de pago.

Respecto de las excepciones propuestas el estrado se sostiene en su posición en lo tocante a la inoperancia de la compensación en el caso confrontado; si el del caso y la Equidad seguros estima que existen sumas de dinero en su favor derivadas del saldo aquí debatido deberá acudir a los mecanismos dispuestos para hacerlos exigibles; sin embargo la distinguida colega admite que fue el año 2022 que se informó a la Cooperativa la existencia de dos primas impagadas respecto de dos pólizas y que previo el cruce de los montos quedó un saldo a su favor superior a los \$19 millones de pesos, cuando el dossier informa que en el año 2018 no solo se planteó el retiro de la Cooperativa, sino la cancelación potestativa y unilateral de las pólizas a cargo de dicho estamento.

La carencia de legitimación por pasiva no ofrece reparo mayor, tal como se verificó en el compendio procesal, pues la acción se dirigió siempre contra la entidad que en su momento reconoció, a través de escrito no dubitado, la existencia de unos dineros (aportes) cuya titularidad le corresponde a quien ejecutó por la devolución de los mismos (obligación de dar).

Entonces, la ejecución se seguirá adelante como se dispuso en el mandamiento de pago, del mismo modo, se ordenará la liquidación del crédito, se decretará el avalúo de los bienes embargados, y de los que en el futuro llegaren a aprisionarse, se condenará en costas y se fijará el valor de las agencias en derecho, de conformidad con el artículo 361 Ibidem.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL de Pereira Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,**

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas por la parte ejecutada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Seguir adelante con la ejecución en la forma como se dispuso en el mandamiento pago proferido en este proceso EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA instaurado por la COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE CARTAGO (COOMOCART). y en contra de LA EQUIDAD SEGUROS O.C. (LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES Y LA EQUIDAD).

TERCERO: Decretar el avalúo y remate de los bienes aprisionados y de los que en el futuro y eventualmente llegaren a embargarse para esta ejecución.

CUARTO: Condenar en costas a la parte demandada, y a favor de la parte demandante. Líquidense en la forma dispuesta por el artículo 361 del Código General del Proceso.

QUINTO: Las agencias en derecho serán incluidas en la liquidación de costas y se tasan por la suma de \$ 950.000 (literal a numeral 4 artículo 5º Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 C.S. de la J.)

SEXTO: Requerir a las partes para que practiquen la liquidación del crédito conforme lo estipula el artículo 446 del Código General del Proceso.

ESTADO 098 DEL 18 DE JUNIO DE 2024

Firmado Por:
Jose Julian Hernandez Cataño
Juez
Juzgado Municipal
Civil 008

Pereira - Risaralda

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c193ddabac7059dc4cefd774dcc4c4eba9b6bc9f986b87860681878cc522fcd3**

Documento generado en 17/06/2024 09:51:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>